

Municipio de San Antonio y dirigentes ingresan más escritos: Presentan recursos judiciales de última hora para evitar el desalojo de megatoma

Alcalde aduce que ni Carabineros ni la inmobiliaria han informado de sus planes para hacer efectiva la medida que fue ordenada por la justicia.

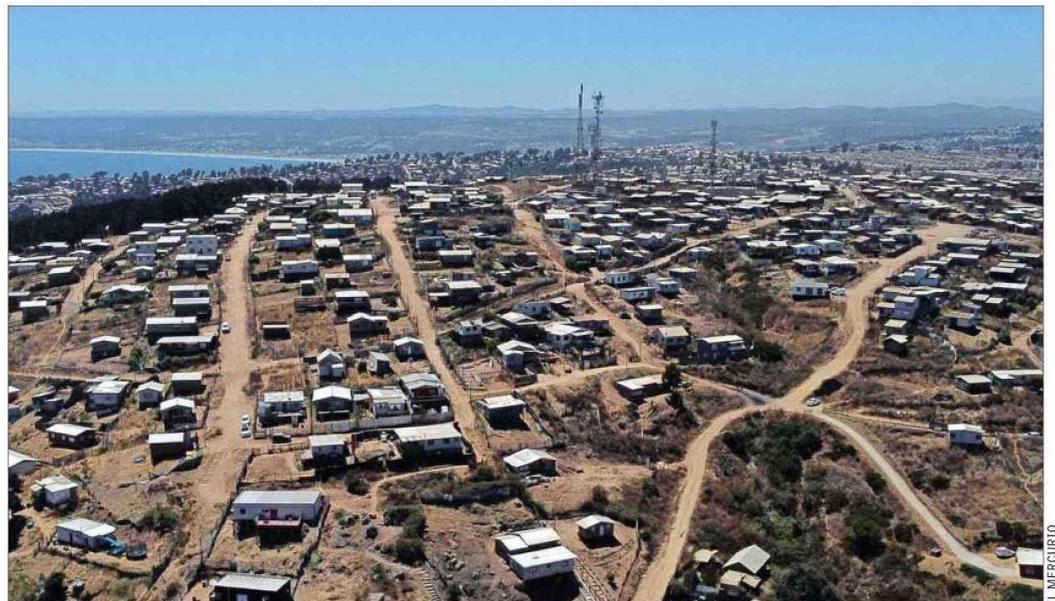
MAURICIO SILVA

“Carabineros no ha informado de algún plan de servicio integral que permita abordar lo resuelto”. El alcalde de San Antonio, Omar Vera (independiente), insiste con este argumento para que la Corte de Valparaíso acceda a aplazar el desalojo, fijado para el próximo jueves, de 10 mil personas desde el macrocampamento instalado en el cerro Centinela.

La autoridad ingresó un nuevo escrito al tribunal de alzada porteño, pese a que este ya rechazó todas las impugnaciones y fijó que a las diez de la mañana de este día 27 deberá tener lugar el lanzamiento, que involucraría a 1.100 carabineros.

Aunque el fallo asigna al municipio un rol coordinador, Vera aseguró que la policía uniformada no le ha dado detalles de este plan integral. A su juicio, debe considerar que “la magnitud de este proceso puede implicar un riesgo para la salud e integridad física de los habitantes de los predios, entre los cuales se encuentran grupos prioritarios que requieren especial protección”. Ello, al tomar en cuenta que tres mil de los ocupantes son niños y adolescentes, el 8% es adulto mayor, el 45% de los jefes de hogar son mujeres y el 13% inmigrantes, sobre todo haitianos.

Vera repara que el plan tampoco ha detallado las medidas para la seguridad del personal de Carabineros y servicios públicos involucrados. Esto último, en referencia aparente a anuncios de dirigentes de la toma de que re-



GRAVAMEN.— Los dueños rechazan el emplazamiento del alcalde y dicen que el único gravamen que tienen es recibir el terreno. Sí pretenden cercar lo desalojado, pero para eso requieren que Carabineros les informe su plan.

sistirán el desalojo dando lugar a una “batalla campal”.

El jefe comunal también apunta contra el propietario que pide el desalojo. “Resulta de suma preocupación que la inmobiliaria no ha informado cuáles medidas adoptará para asegurar el cierre del terreno, ni ha indicado si cuenta con botadero autorizado de escombros, ni los recursos, medios

materiales y personal que dispondrá el día del lanzamiento”, plantea. “El proceso requiere una serie de trabajos de limpieza y ordenamiento, así como coor-

dinación con organismos de seguridad para evitar una nueva ocupación y prevenir gastos adicionales a los órganos del Estado”, agrega.

En tanto, un grupo de dirigentes asesorados por el abogado Rodrigo Valdés interpuso una nueva reposición para aplazar el desalojo. Aunque la Corte de Valparaíso había rechazado esta acción, los dirigentes insisten en que por el carácter aclaratorio del nuevo escrito ingresado, necesariamente deberá ser visto por la Corte Suprema.

El Gobierno está congregando a cientos de familias ocupantes en el gimnasio de la Escuela Padre André Coindre, de San Antonio, para ir formalizando la constitución de 32 cooperativas que, reunidas en una federación, compren el predio al dueño.

Aporte inicial y cuotas

El objetivo es que cada socio aporte inicialmente \$200 mil y luego cuotas mensuales de \$100 mil, dicen los dirigentes, en un plan que el Gobierno detallará a los dueños en una reunión que se realizará mañana, buscando persuadir sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia.

CLAVE
 La garantía que el Estado pueda dar a su plan definirá si el dueño lo acepta o no.